

INTRODUCCION

La oposición política y social en Honduras existe y es imprescindible partir de esa premisa porque hay sectores interesados que lo ponen en duda. El presente análisis coyuntural confirma el creciente aislamiento del sector liberal gobernante --llamado rodista-- que ha sido presa de sus errores en materia económica, política y social. Después de dos años y medio de haberse instalado en el poder, sus adversarios se han multiplicado, hasta en sus propias filas. La erosión ha sido inevitable desde el primer momento en el cual el presidente Roberto Suazo Córdova dio su visto bueno a la construcción de un Estado de Seguridad Nacional y se entregó a la política contrainsurgente que impulsa la administración Reagan. Pretender convertir el país en un gendarme regional resultó incompatible con la grave crisis económica y social vigente. Está claro que el gobierno equivocó el camino y en lugar de fortalecer un incipiente proceso democrático, lo debilitó. Si bien la política exterior de alineamiento a Washington --sobre todo en la época del general Gustavo Álvarez Martínez-- le granjeó opositores, no han sido tantos como los que ha producido una desacertada conducción económica, seguidora al pie de la letra de los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Resulta paradójico que este gobierno haya definido como prioritario la búsqueda de "subversivos", sin percatarse que la principal fuente de inestabilidad ha sido su propia conducta pública. Si Suazo Córdova prometió "trabajo y honestidad", lo que ha producido es desempleo y corrupción. Ante un panorama de esa naturaleza el creimiento de la oposición ha sido inevitable. El espectro contestatario es amplio --desde la derecha hasta la izquierda-- y su gran punto de coincidencia es la crítica a la política doméstica y externa del grupo gobernante. Los hechos indican que los hondureños viven un período de transición entre la oposición social y política. Las mismas recetas restrictivas del FMI le han cortado las alas al economicismo, puesto que los salarios han sido congelados y se advierte ya una mayor conciencia política. Ese es un proceso aún incipiente, pero que significa una ruptura de la tregua social que implicó el retorno al orden constitucional y el triunfo de los liberales. La formación de un frente opositor amplio sigue siendo una meta a largo plazo, salvo que las organizaciones más representativas de la oposición depongan sus intereses de grupo y estructuren un programa común. La alianza táctica es posible desde el momento en que los argumentos contra el régimen son similares, pero hay dos grandes obstáculos que lo impiden: las expectativas individuales o de grupos que exacerba el período electoral y las diferencias políticas estratégicas. La primera podría ser superable con el diálogo sistemático, pero la segunda siempre estará presente, como es natural en una sociedad con un injusto orden social establecido.

a) ANTECEDENTES

Una lectura sostenida de los cuatro periódicos hondureños en los últimos seis meses permite dis-

MOVIMIENTO OPOSITOR EN HONDURAS



tinguir un movimiento opositor en ascenso. Las noticias concernientes a huelgas, tomas de tierras, manifestaciones públicas, reclamos por la vigencia de los derechos humanos, exigencias de democratización y otras de su estilo dan la pauta de una creciente inconformidad. El fenómeno es más notorio si se toma en cuenta que el resultado de los comicios generales del 29 de noviembre de 1981 centralizó el espacio político existente en manos de los partidos tradicionales y las Fuerzas Armadas. Los sectores que ofrecían un programa de gobierno oscilante entre el centro y la izquierda (Partido Innovación y Unidad, Democracia Cristiana y Frente Patriótico Hondureño) apenas lograron, en conjunto, el respaldo del 4% de los votantes, cifra muy inferior a sus cálculos iniciales. Para citar un ejemplo, líderes demócratas cristianos confiaban pocas horas antes de los escrutinios en obtener 10 puestos en el Congreso Nacional, para al final conformarse con uno solo.

En lo que atañe a los dos partidos comunistas y al socialista, que acuerpaban los candidatos que el Frente Patriótico Hondureño postulaba en tres departamentos, la suerte no fue distinta puesto que sólo obtuvieron cerca de cuatro mil sufragios en un área que superaba los 250 mil electores. ¿Inmadurez, inexperiencia, imprevisión, falta de recursos, fraude o represión?. Las justificaciones fueron abundantes, pero la mayoría de ellas escondían lo obvio, que las fuerzas políticas emergentes habían sido víctimas de sus propias limitaciones para entender, responder y canalizar las demandas que a diario expone el hondureño de pocos o medianos recursos económicos. En ese contexto, para varios críticos, la oposición estaba condenada a desapare-

cer, vegetar o atomizarse. Sin embargo, sus previsiones partieron de una base falsa, que el retorno al orden constitucional era el inicio de la actualización histórica del país.

A lo largo de su gestión gubernamental, el equipo de poder que rodea a Roberto Suazo Córdova ha persistido en imponer una serie de decisiones políticas que tienden a polarizar la opinión pública en los asuntos que concitan mayor atención nacional. La lista es extensa al respecto, pero se pueden enumerar entre los más importantes la imposición de excesivas cargas tributarias en deterioro de los grupos poblacionales de pequeños y medianos recursos económicos, la exoneración millonaria de impuestos a transnacionales como la Rosario Mining Company y Compañías Bananeras, la corrupción en el manejo de bienes estatales, los despidos masivos de empleados públicos, la emisión de leyes anti-populares como los decretos 33 (llamado antiterrorista) y 77 (anti-magisterial), complicidad ante claras violaciones a los derechos humanos, sumisión a la política contrainsurgente de Washington, paralización del proceso de reforma agraria, irrespeto al principio de neutralidad en los asuntos de los países vecinos, apego a las directrices del Fondo Monetario Internacional y anuencia para consolidar en el país la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Para impulsar esa política le ha favorecido contar con un control absoluto sobre la administración pública, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Eliminando la independencia que según la Constitución deben tener los tres poderes del Estado.

Desde 1982 se volvió notorio que, a despecho de su

vocación civil, el Partido Liberal decidió alejarse de sus bases de sustentación y hacer gobierno en comunión de intereses políticos con un sector ultraderechista de las Fuerzas Armadas y con la administración de Ronald Reagan. ¿Qué buscaban los rodistas-núcleo hegemónico del partido gobernante con esa alianza? Fundamentalmente dos cosas, supervivencia y un proyecto político definido. El norte de ese triángulo de poder fue crear un Estado contrainsurgente fuerte, capaz de asegurar una superioridad estratégica regional sobre el sandinismo y la guerrilla salvadoreña. Para los rodistas el trato consistía, también, en ofrecer a Washington una pieza geopolítica valiosa en el tablero centroamericano a cambio de transformarse en un socio económico privilegiado.

En la práctica los planes no marcharon de acuerdo con lo previsto. La Casa Blanca no inundó de dólares la economía hondureña, sino que presionó desde un comienzo a realizar su reajuste a la economía nacional con un conjunto de directrices monetarias contenidas en el "Reaganomics", entregado a Suazo Córdova antes de que tomara posesión de la presidencia en enero de 1982.

El documento "sugirió" a la administración liberal desarrollar una relación cercana de trabajo entre el Fondo Monetario Internacional y Honduras, eliminación del control de precios interno, revisión total de la estructura tributaria, recortar el presupuesto para programas sociales (salud, educación, reforma agraria, etc.), brindar mayores concesiones a las transnacionales norteamericanas que desean invertir capitales en la agro-industria o minería, individualizar la entrega de tierras al campesinado y optar por un programa masivo de titulación de tierras.

El resultado tras dos años de experimentación es un panorama de depresión y recesión generalizados, agudizando el grado de insatisfacción de las necesidades básicas de la población. En lugar de fortalecer su aliado, Washington lo debilitó. La endeble economía hondureña, agro-exportadora y dependiente del capital externo, se tornó más vulnerable. Nunca como hoy el FMI se ha mostrado más insolente en su voluntad de imponer un rumbo al Estado hondureño y a pesar de todo, su política no ha tenido éxito. Lo único palpable son las drásticas reducciones a los fondos destinados a promover la salud, educación o reforma agraria, el fomento del desempleo, el congelamiento de los salarios a pesar de la disminución del valor de la moneda, la restricción a las importaciones (un 75 % de las cuales son materias primas), el aumento en el servicio de la deuda, etc.

¿Quiénes han sido las víctimas de la política de supeditación al "Reaganomics" y al FMI? En un principio, tal como lo revelan documentos oficiales, el costo del reajuste recayó sobre los grupos sociales que iniciaban su incorporación al proceso productivo, empresarios marginales, obreros recién contratados o contratados por último, clase media todavía no consolidada y sobre todo la población urbana-marginal que no consigue trabajo. Desde luego, la esfera de las víctimas sociales incluye ese 53 % de la población total que vive en extrema pobreza, un tanto relegada del interés oficial por no tener recursos para tributar.

Como es natural, el trasnochado modelo monetarista en lugar de paliar la crisis, la agudizó. Unos tras otros los indicadores económicos negativos se fueron acumulando. Un estudio realizado por la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica (CONSUPLANE), a mediados de 1983, demostró que la situación ocupacional y las condiciones de trabajo de la fuerza laboral del país se han deteriorado drásticamente. Investigaciones oficiales tasan en 300 mil el número de cesantes, (50 mil más que en 1981) alrededor del 25 % de la

población económicamente activa. Los despidos de trabajadores han tenido lugar en todas las actividades económicas del país, su mayor incidencia se presenta en la industria manufacturera y de la construcción. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno para enfrentar ese desafío que asume características estructurales y también coyunturales? Contrario a la lógica o al instinto de supervivencia política, sigue aferrado al monetarismo y en la actualidad para sostener a como de lugar el modelo impone drásticas medidas contra los grupos organizados (sindicalismo, empleados públicos, capas profesionales urbanas y movimiento campesino del sector reformado) que poseen influencia política y, por tanto, capacidad de respuesta.

Uno de los efectos más interesantes de esa práctica gubernamental es haber orillado a vastos sectores de la clase media a la oposición política. En el informe sobre la economía de Honduras presentado por el régimen liberal a la Comisión Kissinger, el 14 de octubre de 1983, se calculó que en los estratos económico-sociales medios se encuentran el 26.1 % de las familias rurales y el 51 % de las urbanas. Esa cifra es conservadora, puesto que incluye a las personas cuyos ingresos oscilan entre 1000 y 3500 dólares anuales, sumas que sirven para cubrir algunas necesidades, pero deficitariamente. Lo cierto es que la tradicional actitud de indiferencia ante los problemas políticos por parte de la clase media se está disipando, al comprobar que la crisis del sistema les ha cortado la posibilidad de ascenso social. Sometidos a una depauperación creciente y afectados por una crisis de valores en nuestra sociedad, algunos núcleos de la pequeña burguesía urbana y agraria se están radicalizando, aunque en su mayoría buscan acomodo en nuevas corrientes de tinte socialdemócrata o disidentes de la cúpula hegemónica del Partido Liberal. Ese desplazamiento ideológico ha sido advertido por las autoridades, pero siendo incapaces de frenarlo por la vía de las transformaciones sociales, han recurrido al expediente de la intimidación y represión para enfrentarlo. Sin embargo, es preciso admitir un relativo grado de tolerancia oficial a la llamada oposición política legal (PINU, DC, PN), no así con las organizaciones sindicales y obreros cuando adoptan líneas de acción reivindicativas y menos aún con las que califican de "subversivos" o "comunistas", lo que fue claro hasta el 31 de marzo de 1984 cuando fue derrocado de la Jefatura de las Fuerzas Armadas el general Gustavo Álvarez Martínez.

Los siguientes datos confirman que ese criterio no es antojadizo. En 1982, consumado el retorno al orden constitucional con el ascenso de Suazo Córdova, persistieron los asesinatos, desapariciones y capturas, los allanamientos de moradas sin orden judicial, los abusos de la autoridad pública y aparecieron los primeros cementerios clandestinos. En ese año el número de desaparecidos ascendió a 25 y se le atribuyó responsabilidad a los cuerpos militares del asesinato, con transfondo político, de nueve personas, plenamente identificadas. Entre 1983 y 1984 los secuestros y posteriores desapariciones afectaron a 27 personas. El mismo presidente Suazo Córdova se encargó de señalar en casi todos sus discursos que el principal enemigo interno de su gobierno "es la subversión", pero en la práctica el blanco se amplió. Realmente la izquierda política (o político-militar), en el país nunca ha superado el límite de seguridad tácticamente permitido por los militares, así que la esfera de represión ha trascendido ese marco. A propósito de ello, un manifiesto del conservador Partido Nacional, elaborado el 16 de noviembre de 1983, denunció la "violencia escalada que el gobierno liberal está poniendo en práctica para usurpar con fines repudiables las directivas de las instituciones y organizaciones políticas, culturales y sociales que no le son po-

líticamente afines para poder ejercer el poder público en forma arbitraria y antidemocrática. (Diario Tiempo, 18 de noviembre de 1983).

El ambiente de hostigamiento, delación y brutalidad imperante en 1982 y 1983 provocó que la población viviera una etapa de acumulación de inconformidad y desencanto, con sentimientos de oposición que no encontraban canales de expresión. Las críticas asumieron, en lo fundamental, carácter esporádico, soterrado, salvo la beligerancia de una media docena de figuras públicas y de una columna guerrillera del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, sección de Honduras, que incursionó sin éxito en la montañosa región de Olancho, zona de constantes enfrentamientos entre campesinos y latifundistas.

Sin embargo, 1984 empezó con otras características en la instancia popular. Los operativos de recuperación de tierras se multiplican a nivel de bases campesinas, sin distinciones de organización, se produjeron tomas de colegios por parte de estudiantes que no deseaban quedar al margen de la cobertura educativa, ocurrieron las primeras marchas masivas exigiendo respeto a los derechos humanos y verdadera neutralidad con respecto a los países vecinos. En especial la semana del 18 al 24 de marzo estuvo marcada por una serie de acontecimientos que revivieron el espíritu de protesta de los trabajadores hondureños. El detonante fue la desaparición, el domingo 18, del dirigente sindical Rolando Vindel y del economista Gustavo Morales. Las Fuerzas Armadas y el gobierno trataron de frenar la ola en ascenso capturando, en dos días, a 600 sindicalistas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero se vieron obligados a liberarlos a corto plazo. En ese contexto, ocurrió el movimiento militar del 31 de marzo que derribó al general Gustavo Álvarez

Martínez de la jefatura castrense. Su inmediata expulsión del país significó una bocanada de aire fresco para la oposición, pero ésta había dado pruebas de su actividad antes de esos acontecimientos. El desgaste de la administración compartida entre Suazo Córdova y Álvarez Martínez ya era palpable, tal como lo evidencia la ampliación del espectro político contestatario.

b) PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE OPOSICIÓN.

Una de las preguntas más difíciles de contestar en Honduras ha sido definir la influencia real de la oposición política al gobierno liberal. Los analistas ensayan todo tipo de respuestas, conforme los intereses económicos y políticos que representan. Hay quienes aseguran que "la oposición no existe", otros apuntan que "hay opositores, pero no hay oposición" y algunos recurren a viejas citas del marxismo, diciendo que en el país hay "un desfase entre las condiciones objetivas y subjetivas de la sociedad". Una visión detenida sobre ese asunto permite descubrir que la disidencia, en mayor o menor proporción, siempre ha existido, pero débil, un tanto anárquica, inconexa, sin los vasos comunicantes necesarios para lograr el mismo tono crítico ante los desaciertos gubernamentales. Y es que en Honduras a menudo se olvida que la oposición política sólo adquiere legitimación en la práctica.

En estos momentos, la oposición con mayor o menor franqueza y beligerancia abarca desde la derecha a la extrema izquierda, con múltiples organizaciones o personalidades que buscan capitalizar la ciudadanía inconforme con la administración de Suazo Córdova y la situación del país. El siguiente cuadro da una idea más aproximada de cuantos adversan la fuerza gobernante.

CUADRO No.1 (Fuente: CEDOH)

Opositor	Derecha	Centro	Izquierda	Extrema Izq.
Partido Nacional	X			
Partido de Innovación y Unidad (PINU)		X		
Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH)		X		
Alianza Liberal del Pueblo		X		
Movimiento Liberal Democrático Revolucionario.		X		
Movimiento Azconista		X		
Partido Comunista de Honduras (PCH)			X	
Partido Comunista de Honduras (PCH-ML)			X	
Partido Revolucionario de los Trabajadores Centro americanos (PRTC-H)				X
Movimiento Fuerza Popular de Liberación "Cinchoneros"				X
Frente Morazanista de Liberación Nacional de Honduras (FMLNH)				X
Fuerzas Populares Revolucionarias "Lorenzo Zelaya".				X

En total son 12 organizaciones, seis legales y seis clandestinas, con puntos de coincidencia entre sí y también notables con tradiciones, también hay pequeños núcleos que buscan sus propias alternativas. Esa diversidad de expresiones políticas es relativamente nueva, en la mayoría de los casos data de 1980, cuando la concurrencia de crisis económica, coyuntura electoral, construcción de un estado de Seguridad Nacional, supeditación al mo-

delo contrainsurgente norteamericano y Revolución Sandinista incentivaron el panorama hondureño a mayores niveles de discusión. En el interior de los partidos políticos, poco acostumbrados al debate (con su larga tradición de caudillismo y centralismo) las diferencias muchas veces evolucionaron a contradicciones antagónicas, por aspiraciones de poder o diferencias ideológicas, lo que derivó en profundas divisiones y subdivisiones, como los ejemplos que se observan a continuación.

CUADRO No.2 (Fuente CEDOH)

Partido Liberal	<ul style="list-style-type: none"> Alianza Liberal del Pueblo Movimiento Rodista 	<ul style="list-style-type: none"> Movimiento Liberal Democrático Revolucionario. Movimiento Azconista
Partido Nacional	<ul style="list-style-type: none"> Movimiento Unidad y Cambio Zuñiguismo Riverismo Melgarismo Callejismo 	
Partido Comunista de Honduras (Marxista Leninista)	<ul style="list-style-type: none"> Frente Morazanista de Liberación Nacional 	
Partido Comunista de Honduras	<ul style="list-style-type: none"> Unión Revolucionaria del Pueblo "Cinchoneros". 	
Partido Socialista *	<ul style="list-style-type: none"> Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos—Sección de Honduras 	

* En este caso particular la transición había sido prevista de antemano.

En lo que atañe a los partidos Demócrata Cristiano e Innovación y Unidad, no hay una división orgánica tan marcada, pero sí discrepancias ideológicas serias entre algunos sectores internos. La forma en como terminarán las discusiones dependerá del rumbo de acontecimientos en el país y de la amplitud con que cada partido ventile sus asuntos. La regla presente es que a mayor imposición, mayor división y a mayor democratización menor fraccionamiento.

En el caso de los movimientos de izquierda (con toda la amplitud que brinda el término) el fraccionalismo es común y patético. De hecho, no hay una tan sola organización que realmente esté unida. En el medio hondureño pululan diversos grupos con la voluntad de encontrar un mecanismo que supere las prácticas artesanales y oportunistas, pero hasta el momento su búsqueda parece infructuosa. No obstante, algo se ha avanzado puesto que lo tradicional en el país ha sido que los dirigentes políticos centren sus pugnas internas en la simple búsqueda de puestos de dirección, sin embargo, la convulsión que impera en el área abre lentamente nuevas e importantes fuentes de discrepancia, entre las que se pueden citar la formulación de un programa opositor que ofrezca alternativas reales de solución a la crisis, la necesidad de un liderazgo que supere el modelo caudillista, reformas a las viejas estructuras partidarias (caracterizadas por un centralismo antidemocrático) la ampliación del espacio crítico y sentar las bases para la preeminencia del poder

civil, así como una redefinición de la alianza del país con los Estados Unidos.

A los liberales en el poder les han preocupado esas manifestaciones y en la medida de sus posibilidades tratan de mediatizarlas, sacarles provecho o eliminarlas. En el caso específico del Partido Nacional, su principal rival electoral, ha sido evidente la intervención del Estado para estimular la división interna, exacerbando sus contradicciones personales. Un sector importante de esa organización derechista advirtió que se les trata de "mantenerlos abandonados a la voluntad de un partido que gobierna con demasiados errores graves y sin encontrar una verdadera oposición que obligue a enmendarlos" (Diario El Herald, 30 de julio de 1983). La interminable pugna por la hegemonía interna entre los mismos nacionalistas ha terminado por convertir a los liberales en el gran árbitro de sus disputas. Entre 1983 y 1984 el Comité Central del Partido Nacional ha cambiado de manos por lo menos media docena de veces. Está claro que su división favorece a los liberales porque les impide desarrollar una eficaz labor de proselitismo con vistas a los comicios generales de 1985, pero circula también la hipótesis de que en el sustrato del intervencionismo liberal esté la idea de restar por completo a los nacionalistas el respaldo de círculos militares y en cambio, gravitar como el aliado civil de éstos en el usufructo constitucional del Estado. El secretario general del Movimiento Liberal Rodista, Alberto Rodríguez, sostuvo en público que la alianza con las Fuerzas Armadas les garantizaba un segundo periodo electoral. Con ello se está repitiendo una vieja táctica de los políticos tradicionales, conscientes de que en los últimos 30 años la institución castrense se ha convertido en el factótum de la nación. De lo que probablemente no se han percatado los liberales es que las Fuerzas Armadas han ido moldeando sus propios proyectos políticos, como lo demostró palmariamente el gran Alvarez Martínez y como se columbra con el movimiento de oficiales jóvenes que encabeza el general Walter López Reyes. Cabe preguntarse, ¿Hasta qué grado los nacionalistas, inestabilizados por grupos al margen de su membresía, podrían reforzar el movimiento opositor popular? Lo más probable es que puedan ser

un aliado temporal, táctico, pero es muy difícil, casi imposible, que formen parte de una alianza electoral multipartidaria, salvo que el resto de las organizaciones políticas se sumen a sus candidaturas. Además, en lo interno aún tienen que dilucidar qué grupo será el que controle la maquinaria partidaria con vista a los comicios presidenciales a pesar de la controversia que los divide, los distintos dirigentes parecen coincidir en la necesidad.

- 1) Mantener la República libre, soberana e independiente y enfatizar que la participación de fuerzas extrañas en asuntos de nuestra incumbencia sólo puede ser dentro de las normas del sistema interamericano, la ONU y de conformidad con la Constitución.
- 2) Respaldo los esfuerzos para preservar la paz en Centro América.
- 3) Exigir firmeza en la solución de los problemas fronterizos con El Salvador.
- 4) Respeto a los derechos individuales y sociales del pueblo hondureño.
- 5) Condenar cualquier intento de prorrogar el gobierno liberal más allá del tiempo establecido.
- 6) Reclamar del gobierno más acción y responsabilidad en la atención de los problemas económicos y fiscales que afronta el país. (Diario Tiempo, 18 noviembre de 1983).

Los nacionalistas confían en resolver sus conflictos internos a mediano plazo y contar con el tiempo necesario para ser el capitalizador mayoritario de la inconformidad promovida por el gobierno liberal, confiando en el espíritu bipartidista de la población hondureña.

En sus cálculos anotan como un punto a su favor la profunda división interna del Partido Liberal. En las filas del partido gobernante activan el Movimiento Liberal Rodista (cuyo coordinador general es el doctor Roberto Suazo Córdova), la Alianza Liberal del Pueblo (ALIPO), el Movimiento Liberal de Izquierda Revolucionaria (M-LIDER) y el grupo seguidor de José Azcona.

Entre esos grupos las diferencias ideológicas adquieren rasgos más evidentes. Los rodistas o suazocordovistas representan los intereses de la clase media rural, capas urbanas, un sector latifundista y empresarios de la industria y la agro-industria, ligados y/o subordinados al capital transnacional. La ALIPO está orientado por un sector bancario e inversionista nacional que ha buscado modernizar las estructuras productivas del país en aras de elevar la productividad, crear fuentes de trabajo y ampliar el mercado interno, pero su beligerancia política ha permanecido atada a la suerte de sus inversiones y compromisos financieros. La ALIPO era una de las organizaciones más activas hasta la primera semana de junio de 1983 cuando se fraccionó.

Un fallo posterior del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal le dejó el membrete de ALIPO a los denominados "banqueros" y motivó indirectamente la creación del M-LIDER, bajo la dirección de los hermanos Jorge Arturo y Carlos Roberto Reina. Ambos dirigentes pretenden crear, dentro o fuera de su partido, una organización social-democrática, para llenar el vacío existente en la materia.

En uno de sus más importantes análisis del momento político hondureño (Diario Tiempo, 9 de junio de 1984), el M-LIDER caracterizó la administración del presidente Suazo Córdova, en lo interno, como "indefinida, confusa y sin principios", señalando que el poder civil proclama una política nacional basada en el pluralismo ideológico, pero algunos sectores tratan de imponer una línea de intolerancia oscurantista. A juicio de esa corriente política, el gobierno actual persigue liberales, desconoce la independencia de los tres poderes del Estado, no hace valer la supremacía del poder cons-

titucional civil sobre el militar, permite la anulación del Habeas Corpus y otras garantías individuales, no toma medida contra los abusos de los cuerpos represivos y ve con indiferencia la actuación de los escuadrones de la muerte, contribuye a la enajenación de la soberanía patria, se hace cómplice del guerrerismo y participa en planes agresivos contra otros estados.

El M-LIDER también ha censurado en diversas oportunidades la militarización de la política exterior hondureña, apegada a las directrices que imparte la administración de Ronald Reagan a través de su embajador John Dimitri Negroponte. En conjunto, esa organización plantea que las tareas fun-

damentales son: definir una política de Estado orientada a impulsar y defender los intereses de las mayorías populares, impedir que se profundice la polarización, evitar que los planes económicos adoptados sigan golpeando las clases sociales más desposeídas, diseñar mecanismos que frenen la actual descapitalización de la economía nacional, construir un modelo político, social y económico autóctono, poner en marcha una vía verdaderamente democrática y pacífica, implementar una alternativa que contrarreste la Doctrina de la Seguridad Nacional, resolver cuanto antes la delimitación fronteriza con El Salvador, luchar por una solución negociadora, bilateral y multilateral, de los conflictos que vive Centro América, apoyar la gestión del Grupo de Contadora, evitar la carrera armamentista y velar por el más absoluto respeto a los derechos humanos. El proyecto del M-LIDER ha tenido, por el momento, mayor implantación en capas medias urbanas, pero sus posibilidades de acceder al poder dentro del Partido Liberal son mínimas, debido al control que ejercen los rodistas y es probable que en lo que resta del año ó en 1985 se transforme en un partido independiente.

Con mayor o menor énfasis, en dependencia al grado de conservadurismo interno, esa posición está presente en la línea crítica que postulan el Movimiento Azconista, surgido en agosto de 1982 después de unas elecciones internas dentro del liberalismo, calificadas como "fraudulentas" hasta por José Azcona, (en ese tiempo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal) la Democracia Cristiana y el PINU. Todos coinciden en que a Honduras le falta democracia social y política, enfatizando, además, que el país vive una fase de creciente polarización y que no hay respeto al pluralismo ideológico.

Es posible que si los principales dirigentes de la oposición política del país convocaran a un diálogo general, se sorprenderían de las grandes coincidencias que a nivel coyuntural y táctico poseen. Entre ellas destacan el desencanto con respecto a la marcha de la administración pública, la crítica al modelo económico imperante, la preocupación por las violaciones a los derechos humanos, (algunos no tanto por los hechos en sí, más bien por su repercusión), el interés de rescatar la política de neutralidad y poner fin a la presencia militar extranjera, (ante el temor de una guerra, que desestabilizaría todas las instituciones), la necesidad de respetar la independencia de los poderes del Estado, evitar flagrantes violaciones a la Carta Magna, exigir la democratización de la vida nacional y rechazar la construcción de un Estado de Seguridad Nacional.

Esa sería una plataforma mínima que resume, también, las demandas tácticas fundamentales de la izquierda en Honduras, aunque a niveles de operatividad las diferencias saltan a la vista, en particular con los grupos político-militares que impulsan la vía armada como método de lucha fundamental. El VII pleno del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista, efectuado el 31 de marzo de 1984, retomó, por ejemplo, la necesidad de

"ofrecer una alternativa frente a la crisis, la represión, los abusos y la corrupción del régimen de turno (. . .) el gobierno liberal que preside el doctor Suazo Córdova ha enfrentado la crisis económica y financiera desde las posiciones de las transnacionales norteamericanas y de las clases dominantes,

a quienes han favorecido con varias de las medidas que ha tomado, descargando sobre los hombros de las masas trabajadoras sus consecuencias nefastas". (Abril, Revista del Comité Central del PCH-ML, Abril-Mayo 1984). Hay indicios de que ese enfoque está presente en los análisis de otras organizaciones marxistas y es fácil comprobar que guarda similitud con varios de los partidos opositores legales. En este caso no se trata que un sector se aburguesa o el otro se proletariza, simplemente es el reflejo de una crisis que tiende a uniformar el lenguaje político y la necesidad de acción. Es enfatizar entre la coincidencia táctica y postergar las diferencias estratégicas.

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones políticas opositoras siguen trabajando en compartimientos y anteponen sus propios intereses, a pesar de que el bipartidismo ha entrado en crisis. Sin duda, las condiciones imperantes en el país y las perspectivas de un agravamiento claman por un esfuerzo unitario, que se sostenga con un programa que busque la actualización histórica de Honduras.

c) OPOSICION OBRERA, CAMPESINA Y GREMIAL.

En Honduras se ha experimentado un proceso de inestabilidad y división que no ha dejado al margen a las organizaciones sindicales, campesinas y gremiales. La intimidación oficial, cuyas cuotas más altas se alcanzaron en el período de Alvarez Martínez, provocó un "repliegue estratégico" del movimiento popular. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional se ha buscado fragmentar los sindicatos, colegios profesionales y al campesinado, restando su capacidad de movilización política y desarmándolo ante el avance de la crisis socio-económica, de la cual son víctimas permanentes. Incluso, organizaciones ultraderechistas como la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) desarrollaron acciones combinando recursos legales e ilegales tendientes a golpear todos los sectores organizados del movimiento laboral a fin de neutralizarlos o ganarlos políticamente. La respuesta ante el intervencionismo fue débil, en parte por la escasa conciencia política de los trabajadores y también porque las organizaciones laborales no estaban preparadas para el tránsito del gobierno de facto al constitucional y resultaron perjudicados. En lugar de intensificar sus demandas y presiones a la administración civil, lo que se concretó fue una tregua social, la que ha empezado a desmoronarse dos años y medio después de haberse iniciado. En el lapso, los trabajadores han perdido terreno y sus problemas se han multiplicado, puesto que la crisis los ha rebasado totalmente, maxime que el retorno al orden constitucional se concretó en un momento laboral difícil y que se ha agravado en los últimos dos años por los desaciertos oficiales.

Si la situación actual es difícil, las perspectivas son peores puesto que la fuerza de trabajo crecerá a un ritmo del 3.5% y pasará de 1,210,500 personas en 1983 a 1,346,500 en 1986. Ello implica que el aparato productivo del país debe absorber el ingreso de 45 mil personas al mercado laboral cada año, lo que es imposible para la deficitaria economía hondureña. Si en un principio la crisis golpeaba los sectores no organizados, hoy la situación ha cambiado y el desempleo se ha convertido también en una

FE DE ERRATA

Boletín Especial 13, agosto de 1984.

“MOVIMIENTO OPOSITOR EN HONDURAS”.

Se Lee

Notables con tradiciones

(Pág.3, tercera línea en el preámbulo
del cuadro 2)

el gran Alvarez Martínez
(pág.3, línea 70)

presidenciales a pesar de la
controversia que los divide, . . .
(pág. 4, línea 7)

en la necesidad.
(pág. 4, línea 9)

generalización del hombre
(pág. 5, línea 35)

Debe leerse

notables contradicciones

el general Alvarez Martínez

presidenciales. A pesar de la contro-
versia que los divide . . .

en la necesidad de:

generalización del hombre

forma de debilitar el obrerismo hondureño. De acuerdo con datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, el número de sindicatos hasta 1979 fue de 290, con 142,113 afiliados.

Esa suma, en relación a la fuerza de trabajo total equivalía a un 12.2 %, según las investigaciones oficiales. En la actualidad no son públicos los datos concernientes a la cancelación de sindicatos al cerrarse los centros de producción, pero la tendencia preocupa a los líderes obreros.

En el país hay tres grandes organizaciones que aglutinan a los trabajadores: la Central General de Trabajadores (CGT), la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). Sus tendencias y vinculaciones son mostradas en el siguiente cuadro.

CUADRO No.3 (Fuente CEDOH)

Organización	Tendencia	Afiliación	Miembros
CGT	Social-Cristiana.	Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y CMT.	Tiene 78 sindicatos, agrupaciones en 8 federaciones, incluye la Unión Nacional de Campesinos (UNC).
FUTH	Izquierda	CPUSTAL y FSM	Tiene alrededor de 30 sindicatos afiliados.
CTH	Oficialista	ORIT	Tiene tres grandes organizaciones afiliadas, la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras, la Federación Sindical de Trabajadores del Norte y la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras. En total son 72 sindicatos, menos que la CGT, pero más numerosos.

La estructura de esas organizaciones se fundamenta en el llamado sindicalismo de base, surgido después de 1954, pero en la actualidad, al margen, se han formado centrales por ramas, como en el caso específico de los empleados de salud o de las instituciones bancarias. El experimento es novedoso y visto con recelo por dirigentes que no creen en las posibilidades del "autonomismo". A pesar de sus diferencias metodológicas es evidente un repunte en la actividad reivindicativa y lo que es más importante aún, se observa en algunas organizaciones el paso de oposición social a oposición política. Incluso esa dinámica afecta ya el interior de la CTH, cuya dirigencia conservadora no puede evitar que sectores importantes, como la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECSITLIH), busquen la unidad de acción con las otras dos centrales de diferente tendencia ideológica. A continuación se podrán observar las demandas fundamentales que plantean las más activas organizaciones de trabajadores.

FUTH.

Estabilidad laboral, oposición a las recomendaciones del FMI, cese al congelamiento salarial, respeto a la vigencia de contratos colectivos de trabajo, evitar la devaluación de la moneda, combatir la intervención del Estado en las organizaciones populares y sindicales, libertades democráticas, impulsar la neutralidad, fin a la presencia de tropas extranjeras y rechazar una guerra con países vecinos.

CGT.

Exigir la reforma agraria, rechazar la creación del Fondo Social de la Vivienda, estabilidad laboral, libertad sindical, libre contratación colectiva, fortalecer el proceso de apertura democrática, respeto a la autodeterminación de los pueblos, instauración

de una paz interna basada en la justicia social y respeto a los derechos humanos.

FECSITLIH.

Consolidación de una posición pacifista hondureña en la región, combatir el desempleo, carencia de libertades, insalubridad, analfabetismo, miseria, hambre, injusticia social, reclamar por la inexistencia del derecho a la sindicalización, exigir la formulación de una política de empleo y rechazar el Fondo Social para la Vivienda.

En 1984 es posible notar que casi todas las organizaciones sindicales beligerantes están tratando de ganar el espacio político que han perdido, algunos con la determinación de superar una política economicista que en la práctica desembocó en conci-

liación de clases. Sin duda, la caída del general Alvarez Martínez abrió una inesperada posibilidad de lucha para el sector trabajador, parte del cual perdió varios dirigentes, secuestrados, desaparecidos o asesinados por los escuadrones paramilitares. Las manifestaciones del 1o. de mayo de 1984 probaron una importante evolución en los acontecimientos, puesto que además de multitudinarias, el contenido de las protestas fue político. Los temas más relevantes fueron respeto a los derechos humanos (libertad a desaparecidos y cese de torturas), paz y neutralidad (no a la guerra contra Nicaragua), rechazo a las imposiciones del FMI, alto a la intervención oficial en las organizaciones populares, una política eficaz para combatir el desempleo e impulsar la reforma agraria, eliminación de los grupos paramilitares y democratización del país. Un mes después de las marchas del 1o. de mayo, los trabajadores volvieron a salir a las calles para protestar por la imposición de nuevos impuestos. Esas movilizaciones fueron las primeras de su tipo y magnitud, desde hace 10 años, con esporádicas excepciones. La duda que se presenta es si las principales centrales de trabajadores serán capaces de superar las movilizaciones coyunturales, hasta transformarlas en un movimiento sostenido y de largo plazo. Algunos rasgos que caracterizan al movimiento obrero también están presentes en el campesinado, uno de los cuales es la proliferación de organizaciones, pudiéndose mencionar la Unión Nacional de Campesinos (UNC), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), la Federación

Nacional de Cooperativas de Reforma Agraria en Honduras (FECORAH), la Unión Nacional de Campesinos Auténticos de Honduras (UNCAH), Unión de Trabajadores Auténticos del Campo (UTAC),

Alianza Campesina para las Organizaciones Nacionales de Honduras (ALCONH), Asociación Campesina Nacional (ACAN), Frente Nacional de Campesinos Independientes de Honduras (FRENA-CAINH), Federación Regional de Empresas Asociativas del Norte (FERIACAN), Asociación Campesina de Desarrollo de Honduras (ACADH), Unión Nacional de Cooperativas Populares (UNACOO), Federación Hondureña de Mujeres Campesinas (FEHMUC), Asociación Nacional de Mujeres Campesinas de Honduras (ANAMUCH), etc.

Ese fenómeno es interpretado de varias formas, por ejemplo, Marcial Caballero, máximo dirigente de la UNC, opina que "la atomización de las organizaciones campesinas es producto del sistema, que busca fraccionar el movimiento por medio de dirigentes corruptos y vendidos" (Entrevista concedida al CEDOH, Mayo 1984). En cambio, Julín Méndez, líder de la ANACH, sostiene que "la división del campesinado es preocupante en vista de que cada dirigente que es derrotado en las asambleas forma su grupo porque nunca se da por vencido, lo cual demuestra la poca conciencia que existe de los grandes valores que animan la lucha reivindicativa de la clase campesina" (Diario La Prensa, 16 de noviembre de 1983). En todo caso, la membresía global de esas organizaciones apenas representa el 20 o 25 % del campesinado, el resto carece de mecanismos de coordinación y su nivel ideológico es aún menor que el promedio general. Es uno de los sectores más influibles por la maquinaria propagandista oficial y de los partidos tradicionales. Sin embargo, sus insatisfechas necesidades de tierra y la generalización del hombre a niveles nunca vistos han promovido en ellos una creciente movilización social, que refuerza las tendencias más beligerantes en el agro. Entre todas las organizaciones, la ANACH y la UNC son las más importantes, con el mayor número de afiliados. La primera fue creada como alternativa oficialista a principios de la década de los 60, mientras que la segunda nació formando parte de un proyecto social-cristiano que incluyó el Partido Demócrata Cristiano y la Central General de Trabajadores (CGT). A pesar de las claras diferencias ideológicas de sus dirigentes, el fenómeno no llega en la misma proporción hasta las bases campesinas, unidas en el propósito de conquistar una reforma agraria integral que eleve su nivel de vida y les abra posibilidades de desarrollo. Hay conciencia de que el gobierno liberal se ha concretado a impulsar el programa de titulación de tierras, promoviendo el minifundio y el individualismo, sin tratar de incorporar masivamente el campesinado a la producción colectiva, dándole los medios indispensables para su trabajo: tierra, asistencia técnica y crediticia, educación, salud y mercados para sus productos.

Para disponer de una idea más aproximada al respecto, se citarán a continuación las demandas principales de la ANACH y UNC, por considerar que las mismas son representativas de la mayoría del campesinado.

ANACH.

Aplicación de la ley de Reforma Agraria, frenar el alto costo de la vida, evitar el desempleo y la subocupación, mayor asistencia crediticia y técnica, que el Estado garantice la comercialización de las cosechas, el fomento de la agro industria en el sector campesino, cese de persecución al campesinado, condenar la reducción al presupuesto de programas sociales, como educación y salud, exigir la dotación de viviendas en el agro, intensificar el proceso democrático en el país, apoyar el adentamiento interno de los partidos políticos para responder a las necesidades nacionales, exhortar a las Fuerzas Armadas para tener una ac-

